



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Decisión No. 173

Medellín, veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022).

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, procede a proferir el fallo dentro de este proceso ordinario promovido por la señora **ROCÍO ELENA COLORADO GIL** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** y la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. con radicado No. 05001-31-05-021-2019-00054-01**

Se reconoce personería al doctor ALEJANDRO MIGUEL CASTELLANOS LÓPEZ, con tarjeta profesional No. 115.849 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de PORVENIR S.A., de igual manera, al doctor ROQUE ALEXIS ORTEGA CORREA, con tarjeta profesional No. 209.067 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de COLPENSIONES.

A continuación, la Sala conformada por los magistrados VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES como magistrado ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el Acta No. 045 de discusión de proyectos, adoptó la decisión que se consigna enseguida:

1. ANTECEDENTES

1.1 DE LOS HECHOS

Manifestó la demandante que nació el 27 de enero de 1962; que se afilió al ISS hoy Colpensiones a partir del 02 de noviembre de 1981, cotizando en el régimen de prima media con prestación definida un total de 886 semanas al 16 de junio de 1999; que a partir del 1 de agosto de 1999, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por el fondo de pensiones y cesantías Horizonte S.A. hoy Porvenir S.A., en donde actualmente se encuentra aportando, sin embargo, manifiesta que la administradora privada no le proporcionó una suficiente, veraz, completa y clara información sobre los requisitos reales para acceder a una pensión en dicho régimen, ni le realizaron proyecciones económicas que le permitieran tener un conocimiento de cómo construir una pensión en el RAIS y mucho menos las diferencias existentes entre éste y el régimen de prima media con prestación definida; que desde la fecha del traslado al fondo privado, ha realizado aportes al RAIS, alcanzando para el 31 de agosto de 2018 un total de 967 semanas cotizadas, que sumadas a las válidamente sufragadas ante COLPENSIONES, acreditan un total de 1853 semanas; señaló que el día 7 de enero de 2009, alcanzó la edad de 47 años de vida, fecha límite en la que podía ejercer su derecho de traslado para el RPM, sin embargo, no recibió la respectiva asesoría que le debió ofrecer Porvenir S.A. para ejercer su derecho de elección y traslado dentro de la oportunidad legal; que el día 24 de septiembre de 2018, solicitó a Porvenir S.A. una proyección pensional y se le indicó que su pensión a los 57 años sería \$781.242; que el 26 de noviembre de 2018, solicitó el traslado de régimen a COLPENSIONES, petición que fue negada, por encontrarse a menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez; que realizó la liquidación de su pensión de conformidad con las normas relativas al RPM, y su mesada pensional equivaldría a \$1.120.848, a partir del 27 de enero de 2019, fecha en la cual alcanzaría la edad de 57 años, teniendo en cuenta, 1.858 semanas y una tasa de reemplazo del 80% sobre un IBL de \$1.409.872; finalizó relatando que percibe una remuneración mensual de \$1.980.000, y durante los últimos 10 años ha mantenido un ingreso constante superior a 1.5 SMLMV, además que supera las 1.800 semanas de cotización.

1.2 DE LAS PRETENSIONES

Con base en los hechos expuestos solicita se declare la ineficacia de la afiliación o nulidad del acto jurídico de traslado realizado el 27 de julio de 1999 al régimen de ahorro individual con solidaridad, a la administradora Horizonte S.A. hoy Porvenir S.A. y, que se encuentra válidamente afiliada al régimen de prima media con prestación definida, administrado por COLPENSIONES; que se ordene a Porvenir S.A. transferir a COLPENSIONES, el saldo de su cuenta de ahorro individual, incluyendo los rendimientos, cuotas de administración y el bono pensional, si a él hubiere lugar; costas y/o agencias en derecho.

1.3 DE LA RESPUESTA

COLPENSIONES a través de su apoderada judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones proponiendo como excepciones las de: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA AFILIACIÓN AL RPM POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA; IMPOSIBILIDAD DE RETORNAR AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA POR FALTA DE REQUISITOS LEGALES; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA Y FALTA DE DERECHO PARA PEDIR; DEVOLUCIÓN DE APORTES DEBIDAMENTE INDEXADOS; BUENA FE; PRESCRIPCIÓN; COMPENSACIÓN; y DESCUENTOS DEL RETROACTIVO POR SALUD.

PORVENIR S.A. igualmente se opuso a lo pretendido y propuso como medios exceptivos los siguientes: PRESCRIPCIÓN; FALTA DE CAUSA PARA PEDIR E INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS; BUENA FE; PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DE TRACTO SUCESIVO; ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA; y la INNOMINADA O GENÉRICA.

1.4 DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en sentencia del 15 de julio de 2021, DECLARÓ la ineficacia del traslado de la demandante Rocío Elena Colorado Gil del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad y DECLARÓ la afiliación sin

solución de continuidad al régimen de prima media; ORDENÓ a Porvenir trasladar a COLPENSIONES y a ésta a recibir los saldos de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo los rendimientos financieros, las cuotas de administración y las sumas del seguro previsional descontados de los aportes realizados en favor de la demandante durante todo el tiempo que estuvo afiliada en el RAIS, incluyendo los tiempos de afiliación con otras AFP; y condenó en costas a Porvenir S.A. en favor de la demandante, fijando las agencias en derecho en un SMLMV.

1.5 IMPUGNACIÓN

La apoderada judicial de Porvenir S.A., interpuso recurso de alzada argumentando en primer lugar, que el fallador declaró una ineficacia que habla de impedir o atentar contra la afiliación del trabajador, según el artículo 271 de la ley 100 de 1993, cuando quedó demostrado en el proceso que su representada no quiso impedir o atentar contra la afiliación del trabajador, y por el contrario, lo que hizo fue brindar una alternativa a la demandante, quien haciendo uso de su libertad y libre escogencia, decidió pertenecer al RAIS, sin que se hubiera presentado algún tipo de reclamación o inconformidad con motivo a su afiliación durante más de 20 años, Que al proceso se allegó el formulario de afiliación debidamente diligenciado, que no fue tachado de falso, el que es un documento público y valido, que indica que la demandante conocía las implicaciones de su decisión, que fue asesorada y firmó de manera libre y voluntaria, como fue ratificado en el interrogatorio de parte; y si ese documento no dio certeza de la asesoría brindada, el fallador de primera instancia tampoco indicó cual sería ese documento, ya que ese formato de afiliación cumple con toda la normatividad legal vigente aplicable para la época, artículo 114 de la ley 100 de 1993, y por tanto su representada no puede ser condenada por cumplir la ley, ni se le puede exigir documentación distinta a la existente para la época. Expreso que la inconformidad con la mesada pensional, como en el presente caso, no puede ser óbice para declarar la ineficacia, aunado al hecho que la demandante está inmersa dentro de la prohibición legal de traslado, según lo establecido en la ley 797 de 2003, declarada exequible conforme la sentencia C-1024 de 2004, en donde se resalta la prevalencia del

interés general sobre el particular, la protección del fondo general de pensiones, la no descapitalización del RPM y el principio de estabilidad financiera en el RAIS. En cuanto a la condena del traslado de los gastos de administración, se opone a la misma, ya que estos obedecen a una disposición legal, establecida en el artículo 20, inciso segundo de la ley 100 de 1993, y que opera para ambos regímenes, donde se destina ese 3% de la cotización a costear gastos de administración y seguros para cubrir los riesgos de invalidez o muerte, trayendo a colación el concepto de la Superintendencia Financiera del 17 de enero del 2000, donde se dice que, cuando opere la ineficacia o la nulidad, lo único que se debe trasladar es la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos, adicional que los gastos de administración sí están sujetos a la prescripción, ya que por su naturaleza no tienen como fin el financiamiento de la prestación de vejez.

Como la sentencia fue adversa a los intereses de COLPENSIONES, se surtirá el grado jurisdiccional de consulta en su favor, como lo dispone el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

1.6 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término oportuno, PORVENIR S.A., solicitando se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se absuelva a su representada, señalando que no le asiste razón al fallador de primera instancia, por cuanto no se alegaron ni probaron, los eventos previstos en el artículos 1741 del CC, para declarar la nulidad absoluta o siquiera relativa del acto jurídico del traslado, lo que conduce a que el mencionado acto goce de validez. Por otra parte, señala que si lo pretendido es declarar la ineficacia prevista en el artículo 271 de la ley 100 de 1993, dicha norma prevé para quien hubiere realizado actos atentatorios en contra del libre derecho de elección del afiliado una multa administrativa impuesta por el Ministerio del Trabajo, y si bien menciona el quedar sin efecto la afiliación, bajo ninguna circunstancia se aproxima a lo dispuesto en los artículos 1740 y ss. En lo demás, reiteró los argumentos del recurso.

COLPENSIONES por su parte, en sus alegaciones solicita sea revocada la sentencia de primera instancia, indicando que no hay lugar a la declaratoria de la nulidad o la ineficacia del traslado a la AFP privada, por tratarse de un acto que además de ser válido, produjo efectos jurídicos, en tanto la accionante efectuó aportes al RAIS, por lo que no es posible derivar obligaciones a cargo de su representada; así mismo resaltó que la afiliación de la demandante a Porvenir se efectuó ejerciendo el derecho legítimo de escogencia de régimen pensional, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 13 literal B de la ley 100 de 1993, por lo que no se puede predicar tampoco la existencia de un vicio en el consentimiento. Considera que se podría estar, no ante una falta de asesoría o un error en el consentimiento, ya que la información que señala la accionante no es falsa, sino frente a una falta de interés, poca interacción o negligencia de la parte actora en su vida pensional. Finaliza indicando que se puede colegir, que la carga probatoria frente a los hechos de la demanda, debe estar a cargo de la demandante, ya que la AFP cumplió con lo legalmente vigente y aplicable para el momento de la afiliación de la actora, por lo que, de conformidad a los principios rectores de la equidad y la solidaridad, imponer una carga adicional más allá del formulario de afiliación, sería una carga desproporcionada e imposible de cumplir.

2. CONSIDERACIONES

Procede la Sala de Decisión a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por Porvenir S.A., advirtiendo que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el estudio del fallo recurrido se limitará a los puntos de inconformidad, así mismo, se hará un estudio de manera general por el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES.

2.1 PROBLEMA JURÍDICO.

Se analizará si hay lugar a la declaratoria de la ineficacia del traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad, con el consecuente regreso al régimen de Prima media con Prestación Definida

administrado por COLPENSIONES, así como las consecuencias de la dicha declaratoria.

Para resolver lo anterior, haremos alusión a los hechos probados y analizaremos lo relativo a la ineficacia del traslado, los valores a trasladar en caso de ser procedente la ineficacia y la excepción de prescripción.

2.2 HECHOS PROBADOS.

Se encuentra acreditado en el proceso que la señora ROCÍO ELENA COLORADO GIL nació el 27 de enero de 1962 como se aprecia en la fotocopia de su cédula de ciudadanía (03AnexosDemanda pág. 4); que realizó cotizaciones al ISS desde el 24 de julio de 1986 como se observa en la historia laboral de COLPENSIONES (03AnexosDemanda págs. 5 a 10 y 07AnexosColpensiones págs. 6 a 11); que el 27 de julio de 1999 suscribiendo formulario de vinculación a Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. (03AnexosDemanda pág. 11 y 11AnexosPorvenir pág. 2); que Horizontes se fusionó con Porvenir S.A. el 01 de enero de 2014 (11AnexosPorvenir pág. 3); que para el 25 de junio de 2019, acredita un total de 1.900 semanas cotizadas, como se reflejan en la historia laboral consolidada de Porvenir (11AnexosPorvenir págs. 24 a 33); que el día 17 de septiembre de 2018, radicó solicitud de proyección pensional ante Porvenir S.A., documentación de su traslado y que se le informara si se le brindó una reasesoría antes de cumplir 47 años de edad, (03AnexosDemanda pág. 12), y su solicitud fue respondida el 24 de septiembre de 2018, entregándole el certificado con saldo a la fecha incluyendo los rendimientos, se le adjunto la historia laboral, se le informó que su bono tenía un valor de \$67.496.016, que su pensión a los 57 años en el RAIS sería de \$781.242, mientras que en COLPENSIONES sería de \$1.093.900 y sobre la reasesoría se le indicó que no se registraba constancia de ella (03AnexosDemanda págs. 13 a la 28); que el 26 de noviembre de 2018, solicitó a COLPENSIONES traslado de Régimen y en la misma fecha, se le informó que no era procedente, por cuanto se encontraba a 10 años o menos del requisito de tiempo para pensionarse (03AnexosDemanda págs. 33 y 34).

2.3 INEFICACIA DE AFILIACIÓN O TRASLADOS DE RÉGIMEN PENSIONAL.

Como el argumento esbozado por la demandante como fuente de su derecho es el de la indebida información, debemos señalar que a lo largo de los años se ha pronunciado la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia sobre este particular, trayéndose a colación las sentencias del 9 de septiembre de 2008, radicación 31.989, M.P. Dr. Eduardo López Villegas; del 22 de noviembre de 2011, radicación 33.083, del 03 de septiembre de 2014, radicación 46.292, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón y 03 de abril de 2019, radicación No. 68852, M.P. Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, exponiéndose en esta última lo siguiente:

"En efecto, la jurisprudencia del trabajo ha entendido que la expresión *libre y voluntaria* del literal b), artículo 13 de la Ley 100 de 1993, necesariamente *presupone conocimiento*, lo cual solo es posible alcanzar cuando se saben a plenitud las consecuencias de una decisión de esta índole. De esta forma, la Corte ha dicho que no puede alegarse *«que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; **de allí que desde el inicio** haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.»* (CSJ SL12136-2014)."

De lo anterior se desprende que es el fondo donde se pretende trasladar el afiliado dentro del sistema pensional, quien tiene la obligación de brindar una asesoría personalizada y completa, por contar con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, analizando las circunstancias particulares del caso, debiendo informar al interesado entre otras cosas, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta individual, el número de beneficiarios y la edad de los mismos; la posible redención del bono pensional; la densidad y constancia de los aportes; y que si no se completa el suficiente capital para obtener, por lo menos una pensión mínima (equivalente al 110% del salario mínimo legal vigente, a la fecha de expedición de dicha ley actualizado con el IPC), debe seguir cotizando; la existencia de diferentes modalidades pensionales, como efectuar las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios futuros de ambas opciones y otras tantas observaciones indispensables para la ilustración

debida del usuario, reiterándose que la labor del funcionario del fondo privado, al realizar el traslado, debe trascender al “DEBER DEL BUEN CONSEJO” como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, pues tratándose la función de las administradoras de pensiones privadas de un servicio público a luz del artículo 48 superior, y atendiendo a la sensibilidad social de su rol, se exige de estas un papel activo en la asesoría, mostrándole al afiliado en detalle las ventajas y desventajas del traslado, a fin de que dicha decisión sea realmente pensada, libre y voluntaria, siendo explicado en la línea de la jurisprudencia especializada, sentencias SL1688-2019 y SL2030-2019, que no basta la simple suscripción de un formulario, ni completar espacios vacíos, ni una simple expresión genérica de las condiciones pensionales, pues lo que se echa de menos es el no brindarse una información clara, precisa, comprensible y específica para el caso particular de cada afiliado a fin de que conozca de la mejor manera posible su situación ante el sistema y de esa manera migre al RAIS con plena conciencia de las implicaciones de su decisión.

Deber de información a cargo de las administradoras de los fondos de pensiones, que en contraposición a lo expuesto por el recurrente, es ineludible y se impone desde su creación, solo que sus parámetros e intensidad de exigencia dependen de la fecha en que se haya dado la afiliación, por lo que no solo es exigible con la expedición del Decreto 2071 de 2015, sino que los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, exigían de estas cumplir sus funciones con suma diligencia, prudencia y pericia, dentro de las cuales se debe entender: *la transparencia, vigilancia, y la información*. Esto, según lo ha dicho la jurisprudencia, a partir del artículo 1603 del Código Civil que enseña que las partes no solo se comprometen en los contratos al cumplimiento de las obligaciones expresas, sino también a las *que emanan de la naturaleza de la obligación*.

En el presente asunto, si bien el Fondo privado que intervino en el acto de afiliación, Horizontes S.A. hoy Porvenir S.A., afirmó que a la demandante se le brindó la asesoría requerida, de acuerdo con la jurisprudencia reseñada, tenía la carga de acreditarlo, ya que en estos asuntos la carga de la prueba se invierte (SL 1452 de 2019, SL2601-2021 y SL202-2022), sin embargo, ninguna prueba se arrimó para demostrarlo

diferente al formulario de afiliación, del cual no puede desprenderse que la vinculación de la actora al régimen de ahorro individual se dio en forma libre, espontánea y sin presiones, porque esa decisión no tiene tal carácter, si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña, circunstancia de la que de igual manera, da cuenta el interrogatorio de parte de la demandante, del que es posible determinar, que la AFP no le brindó en debida forma la información del traslado.

Conforme a lo dicho, la Sala concluye que el fondo al suministrar a la actora la información errónea u omitir la relevante, la indujo a trasladarse al régimen de ahorro individual, debiéndose predicar la ineficacia de dicha vinculación, tal y como lo determinó el juez de Instancia, debiéndose confirmar este punto.

2.4 CONSECUENCIA DE LA INEFICACIA Y VALORES A TRASLADAR

La anterior declaración de la ineficacia del traslado, da lugar al regreso automático de la actora al régimen de prima media con prestación definida, retrotrayendo la situación al estado de cosas iniciales, siendo dable afirmar que la afiliación de la señora Roció Elena Colorado Gil a COLPENSIONES nunca tuvo solución de continuidad.

Acorde con ello, al ser COLPENSIONES la administradora de pensiones que eventualmente tendrá a su cargo el reconocimiento de las prestaciones que puedan causarse en favor de la accionante, se tiene que la orden impartida debe incluir todos los valores recibidos por Porvenir S.A., con motivo del traslado de la demandante, como: Cotizaciones, descuentos de la garantía de pensión mínima, cuotas de administración, sumas adicionales de la aseguradora, y los rendimientos sin deducción alguna, acorde a lo que dispone el artículo 1746 del Código Civil, y la sentencia del 09 de septiembre de 2008, radicación 31.989; debiéndose en consecuencia adicionar el fallo, por los rubros dejados de reconocer.

Y es que la declaratoria de ineficacia tiene efectos ex tunc (desde siempre), y de tal modo, las cosas deben retrotraerse a su estado anterior, como si el acto de afiliación jamás hubiera existido. Por ello, en tratándose de afiliados, se ha adoctrinado que tal declaratoria obliga a las

entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, postura que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de seguros previsionales, pues aun cuando fueron entregados a terceros que los recibieron de buena fe y en el período de afiliación el demandante estuvo cubierta para los riesgos de invalidez y muerte, no son las aseguradoras quienes asumen su reconocimiento por ser claramente terceros ajenos al acto viciado, sino que ello recae en la AFP que incurrió en la omisión y se abstuvo de dar cumplimiento a sus deberes de información frente a los afiliados (CSJ SL2877-2020, SL3199-2021, SL 4652-2021 y SL4426-2021).

Ahora en lo que corresponde a la indexación de las condenas, tenemos que este tema no fue analizado por el juez de primera instancia, sin embargo, la Sala recoge su postura anterior, para ceñirse a los parámetros establecidos recientemente por nuestro órgano de cierre, procediendo de oficio a ordenar que los valores trasladados por concepto de descuentos de la garantía de pensión mínima, cuotas de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, deberán ser indexados al momento del traslado y con cargo de los recursos propios del fondo privado. Al respecto traemos a colación las sentencias SL 359-2021 y SL 950 de 2022, en la que en esta última, se señaló:

"... Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones --debidamente indexados-- con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Criterio que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.

En consecuencia, al resolver la consulta a favor de COLPENSIONES habrá de adicionarse el numeral primero del fallo del a quo, en el sentido de que PROTECCIÓN S.A. deberá trasladar a Colpensiones los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual de la demandante junto con sus rendimientos. De igual modo, la citada AFP deberá devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y

sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos..."

3.5 EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN

La excepción de prescripción, no está llamada a prosperar por cuanto la acción que involucra el tema de traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con la causación de los requisitos y el valor de la pensión, debiendo predicarse la imprescriptibilidad de la presente acción, así como de cualquier rubro que se hubiere descontado de la cotización de la actora mientras duro su afiliación en el RAIS, por cuanto el traslado debe ser completo como se ordenó (Sentencia SL-1421 de 2019, SL-4609 de 2021).

Por todo lo anterior, se CONFIRMARÁ la providencia revisada en apelación y consulta, ADICIONÁNDOSE el numeral tercero, en cuanto a los conceptos a devolver por parte del fondo privado, incluyendo para el efecto los porcentajes descontados para el fondo de garantía de pensión mínima; así mismo se ADICIONARÁ en el sentido que el traslado de los valores por cuotas de administración, porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima y las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, deberán ser indexados al momento del pago.

Costas en segunda instancia a cargo de PORVENIR S.A. y en favor del demandante, las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.000.000.

4. FALLO DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Se **ADICIONA** el numeral **TERCERO**, y se **ORDENA** a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** a trasladar también a **COLPENSIONES** lo descontado para el fondo de garantía de pensión mínima; así mismo, se **ORDENA** a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE**

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. que los valores por concepto de cuotas de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y los descuentos para el fondo de garantía pensión mínima, deberán ser indexados al momento del traslado y con cargo a sus propios recursos.

SEGUNDO: En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia.

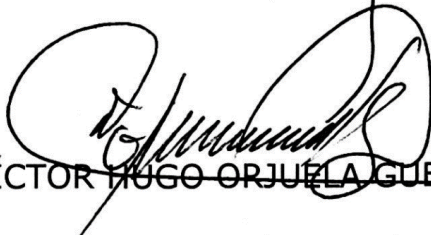
TERCERO: Costas en segunda instancia a cargo de PORVENIR S.A. y en favor del demandante, las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.000.000.

Lo decidido se notifica por EDICTO.

Los Magistrados,



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE